

GACETA OFICIAL

AÑO XXVII

PANAMÁ, LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 1930

NÚMERO 5896

PODER EJECUTIVO

Presidente de la República.

F. H. AROSEMENA

Decreto Oficial: Residencia Presidencial.

Secretaría de Gobierno y Justicia.

DANIEL BALLEM

Decreto Oficial: Palacio de Gobierno segundo piso, Avenida Central—Casa particular: Calle de Santa, 20-19

Subsecretaría de Relaciones Exteriores, oficina de del Correo.

RICARDO A. MORALES

Decreto Oficial: Palacio de Gobierno, segundo piso, Avenida Central—Casa particular: Calle de Santa, 20-19

Secretaría de Hacienda y Tesoro.

NICOLAS VICTORIA J.

Decreto Oficial: Palacio de Gobierno, primer piso, Avenida Central—Casa particular: Calle de Santa, 20-19

Secretaría de Instrucción Pública.

OCTAVIO MENDEZ PEREIRA

Decreto Oficial: Y Ronda de Correo y Telégrafo, primer piso, Avenida Central—Casa particular: Calle de Santa, 20-19

Secretaría de Agricultura y Obras Públicas.

CARLOS ICAZA A.

Decreto Oficial: Palacio de Gobierno, tercer piso, Avenida Central—Casa particular: Calle de Santa, 20-19

CONTENIDO

PODER LEGISLATIVO

LEY 43 DE 1930	PÁGINAS
La cual se reforma la Ley 20 de 1930, se dicta una medida con respecto al Instituto Nacional y se da una autorización al Poder Ejecutivo	2731
La Ley 43 de 1930, de 22 de Noviembre, sobre extradición	2732
La Ley 43 de 1930, de 22 de Noviembre, sobre extradición	2733

PODER EJECUTIVO NACIONAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Decreto número 127 de 1930, de 18 de Diciembre por el cual se establece en el cargo del Gobernador de la Provincia de Panamá	2734
Decreto número 127 de 1930, de 18 de Diciembre, por el cual se hace un nombramiento en el cargo de Policía Nacional	2735
Decreto número 127 de 1930, de 18 de Diciembre, por el cual se nombra a un juez del Tribunal de Comercio	2736
Decreto número 127 de 1930, de 18 de Diciembre, por el cual se nombra a un juez del Tribunal de Comercio	2737

PODER LEGISLATIVO

LEY 43 DE 1930

(DE 20 DE NOVIEMBRE)

por la cual se reforma la Ley 20 de 1930, se dicta una medida con respecto al Instituto Nacional y se da una autorización al Poder Ejecutivo.

La Asamblea Nacional de Panamá,

DECRETA:

Artículo 1º El artículo 4º de la Ley 20 de mil novecientos treinta quedará así:

"Artículo 4º La Biblioteca del Instituto Nacional se llamará en lo sucesivo Biblioteca Ensebio A. Morales en reconocimiento perenne de sus nobles esfuerzos en pro de la cultura patria".

Artículo 2º El establecimiento docente creado por la Ley 22 de 1907 conservará el nombre de Instituto Nacional.

Artículo 3º Autorízase al Poder Ejecutivo para que haga una edición oficial de las obras completas del Doctor Ensebio A. Morales precedidas de un estudio sobre la personalidad y la obra de este estadista.

Dada en Panamá, a los diez y ocho días del mes de Noviembre del año de mil novecientos treinta.

El Presidente,

E. PONCE J.

Por el Secretario,

Justo P. Espino Jr.,
Subsecretario.

República de Panamá—Poder Ejecutivo Nacional—Panamá, 20 de Noviembre de 1930.

Publíquese y ejecútese.

F. H. AROSEMENA

El Secretario de Gobierno y Justicia,

DANIEL BALLEM

LEY 44 DE 1930

(DE 22 DE NOVIEMBRE)

sobre extradición.

La Asamblea Nacional de Panamá,

DECRETA:

Artículo 1º La extradición de delinquentes se regirá por los tratados públicos y, a falta de éstos, por las disposiciones de la presente ley.

Artículo 2º La facultad de conceder o negar la extradición corresponde al Poder Ejecutivo.

Artículo 3º El Poder Ejecutivo podrá entregar a los gobiernos de otros países amigos, a título de reciprocidad, a todo individuo perseguido, acusado o condenado por los tribunales de la nación requirente por hechos que estén erigidos en delito por las leyes de la República y que se castiguen en ella con pena mínima de privación de la libertad no inferior a un año, siempre que el delito haya sido cometido en el territorio de la nación requirente o en sus aguas territoriales, en sus buques mercantes en alta mar o en sus buques de guerra donde quiera que éstos se encuentren, o que, por la naturaleza del delito tenga el Estado requirente, conforme a sus leyes, jurisdicción sobre él.

Artículo 4º Toda demanda de extradición deberá ser presentada por la vía diplomática, acompañada de los siguientes documentos:

- 1º Copia de la sentencia condenatoria, si se trata de un condenado o de la orden de arresto si se trata de un sindicado;
- 2º Todos los datos necesarios para acreditar la identidad de la persona reclamada;
- 3º Copia de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 5º No se concederá la extradición:

- a) Cuando el reclamado sea panameño de nacimiento o naturalizado panameño antes de la perpetración del hecho en que se funde la demanda de extradición;
- b) Cuando, a juicio del Poder Ejecutivo, se trate de un delito político, siendo entendido que no se reputará como tal ni como hecho conexo el homicidio o asesinato del Jefe del Estado reclamante o de cualquiera persona que en él hubiera ejercido autoridad pública al tiempo de ser victimado;
- c) Cuando el reclamado haya sido juzgado y sentenciado en la República por el mismo delito;
- d) Cuando el reclamado haya sido condenado o esté sindicado por delito cometido en la República; pero en este caso se concederá la extradición después de cumplida la pena impuesta o después de terminado el proceso si el fallo de los tribunales fuere absolutorio;
- e) Cuando, conforme a las leyes del estado requirente, hayan prescrito la pena o la acción penal;
- f) Cuando el delito tenga señalada la pena de muerte en el estado reclamante, salvo compromiso de aplicar al reo una pena distinta menos severa;

Artículo 6º La solicitud de extradición o el aviso dado por la vía diplomática de que se intenta solicitarla, da lugar a la detención del presunto extraditado hasta por el término de sesenta días, transcurridos los cuales sin que se haya formalizado la demanda con los documentos del caso, será puesto en libertad; pero podrá ser detenido nuevamente si más adelante se presenta la solicitud de extradición en debida forma.

Artículo 7º Si, concedida la extradición, transcurridos treinta días desde que el reo ha sido puesto a disposición del Estado requirente éste no lo toma a su cargo, el reo será puesto en libertad.

Artículo 8° Las obligaciones civiles que el individuo tenga contraídas en el país, no serán obstáculos para conceder la extradición.

Artículo 9° Recibida la demanda formal de extradición, se notificará ésta al reo si estuviere éste detenido o en libertad bajo fianza de excarcelación, y podrá él proponer, dentro de los tres días siguientes, las siguientes objeciones:

1° La de ser contraria la demanda a las prescripciones de la ley;

2° La de no ser la persona cuya extradición se pide;

3° La de improcedencia por no estar bien fundado el derecho del gobierno reclamante.

Artículo 10. Para probar las objeciones de que trata el artículo anterior, dispondrá el reo de un término hasta de diez días, cuando así lo solicite.

Artículo 11. Del mérito de las objeciones propuestas decidirá el Poder Ejecutivo en el mismo acto por medio del cual resuelve la demanda de extradición.

Artículo 12. El individuo arrestado en virtud de una demanda de extradición, podrá prestar fianza de excarcelación mientras se resuelva la solicitud respectiva, en los casos en que la ley panameña acuerda ese beneficio por delito cometido en el país.

Artículo 13. Cuando se concede la extradición, los papeles, efectos y objetos que tengan relación con el delito y sus autores se entregarán al país requerente bajo condición de devolverlos si alguien probare derechos sobre ellos.

Artículo 14. Si dos o más Estados reclamaren a un mismo individuo por razón de distintas infracciones, se dará preferencia a la falta más grave conforme a la ley panameña. En caso de igual gravedad, se atenderá a la prioridad de la demanda; pero en todo caso tienen preferencia los estados con los cuales existan tratados de extradición. Si las distintas reclamaciones se hicieron por el mismo hecho criminoso, se dará preferencia a la demanda del país del cual fuere súbdito o ciudadano el reo, sin perjuicio de la regla establecida en el artículo anterior en relación con la existencia de tratados de extradición.

Artículo 15. El Poder Ejecutivo podrá autorizar el tránsito por territorio de la República de reos entregados por otros Estados a una tercera nación amiga y hará que se preste protección a sus conductores para evitar la evasión.

Artículo 16. No se podrán concluir nuevos tratados de extradición ni modificar los existentes en desacuerdo con la presente ley.

Artículo 17. Las prescripciones de esta ley son aplicables a todos los casos de extradición contemplados en tratados anteriores, salvo en cuanto se oponga a estipulaciones expresas de éstos.

Artículo 18. Cuando el reo contra quien se proceda en el país estuviere en el extranjero, el tribunal que conozca de la causa o que instruya la investigación solicitará, si fuere el caso, la correspondiente extradición, con testimonio de lo conducente, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Artículo 19. Para que pueda solicitarse la extradición del reo residente en país extranjero, bastará que se haya dictado auto de detención; pero en todo caso es necesario que el delito de que se trate tenga señalada como pena mínima la de un año de privación de la libertad.

Artículo 20. Cuando la solicitud de extradición se haga en virtud de tratado existente, se estará a las estipulaciones de éste.

Artículo 21. Quedan derogados los artículos 2069 a 2111 del Código Administrativo; 2384 a 2391 del Código Judicial y 9° a 16 del Código Penal.

Dada en Panamá, a los veinte días del mes de Noviembre del año de mil novecientos treinta.

El Presidente,

R. G. DE PAREDES.

Por el Secretario,

Justo P. Espino Jr.,
Subsecretario.

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Panamá, Noviembre 22 de 1930.

Comuníquese y ejecútese.

F. H. AROSEMENA.

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Encargado del Despacho,

RICARDO A. MORALES.

LEY 45 DE 1930

(DE 24 DE NOVIEMBRE)

por la cual se dictan algunas medidas con respecto a la prestación de ciertos servicios públicos.

La Asamblea Nacional de Panamá,

DECRETA:

Artículo 1° Desde la promulgación de la presente Ley, las personas naturales o jurídicas que presten servicio público, tales como suministro de gas, agua, energía y luz eléctricas, comunicaciones telefónicas u otros semejantes, no podrán suspender la prestación de esos servicios fundadas en la mora de los clientes o consumidores mientras no se compruebe este hecho ante los tribunales de Justicia.

Artículo 2° El estado de mora de que habla el artículo anterior consiste en la falta de pago de la renta o del consumo en un período vencido.

Artículo 3° En los casos de mora en el pago de un período entero de la renta o consumo el acreedor podrá pedir que se decrete la suspensión del servicio respectivo, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

a) El acreedor presentará al Juez Municipal una solicitud verbal o escrita, según la cuantía del contrato, en la cual exprese las circunstancias detalladas en este artículo;

b) El tribunal sin verificar repartimiento, ordenará inmediatamente que se ponga la solicitud en conocimiento del consumidor, y que se le conceda un término de tres días para que compruebe con el correspondiente recibo del último período de la renta, que no se halla en mora;

c) Transcurridos tres días de la notificación de la respectiva providencia en el caso de no comprobarse el pago de la renta o consumo el tribunal dispondrá que se suspenda la prestación del servicio y lo notificará así a las partes.

Artículo 4° Las empresas que se dediquen al suministro de gas y electricidad, no podrán cobrar a sus clientes como mínimum suma mayor de veinticinco centésimos de balboa (B. 0,25), salvo lo contenido en contrato anterior a esta ley.

Parágrafo. Entiendese por mínimum el valor que se cobre por estos servicios cuando no haya uno de gas o electricidad mensualmente.

Artículo 5° Las disposiciones de esta Ley no comprenden el servicio de agua en las ciudades de Panamá y Colón, que se llevan a cabo en virtud de un tratado Público.

Artículo 6° Las querellas que surjan en la materia se tramitarán como los juicios de lanzamiento en cuanto ese procedimiento no pugne con las disposiciones de esta ley; en consecuencia, las resoluciones del tribunal en asuntos de esta clase no son apelables por quien recibe el servicio.

Dada en Panamá, a los diecinueve días del mes de Noviembre del año de mil novecientos treinta.

El Presidente,

E. PONCE J.

Por el Secretario,

Justo P. Espino Jr.,
Subsecretario.

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Agricultura y Obras Públicas.—Panamá, 24 de Noviembre de 1930.

Públicase y ejecútese.

F. H. AROSEMENA.

El Secretario de Agricultura y Obras Públicas,

CARLOS YCAZA A.

Poder Ejecutivo Nacional

SECRETARIA DE GOBIERNO Y JUSTICIA

DECRETO NUMERO 169 DE 1930

(DE 18 DE DICIEMBRE)

por el cual se aprueba un Decreto del Gobernador de la Provincia de Panamá.

El Presidente de la República, en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo único. Se aprueba en todas sus partes el Decreto número 3 del 13 de las corrientes, por el cual se da una autorización, del Gobernador de la Provincia de Panamá, cuya parte dispositiva dice así:

"Artículo 1.º Autorízase al Concejo Municipal de Panamá para gravar con un impuesto de diez a cien balboas (B. 10.00 a B. 100.00) a los juegos de golf en miniera.

Artículo 2.º Sométase este Decreto a la aprobación del Excmo. señor Presidente de la República, conforme a las disposiciones del artículo 125 del Código Administrativo".

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Panamá, a los diez y ocho días del mes de Diciembre de mil novecientos treinta.

F. H. AROSEMENA.

El Subsecretario de Gobierno y Justicia, encargado del Despacho,

RAMON MORALEZ.

DECRETO NUMERO 170 DE 1930

(DE 18 DE DICIEMBRE)

por el cual se hace un nombramiento en el Cuerpo de Policía Nacional.

El Presidente de la República,

en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo único. Se nombra al señor Carlos Devalle Subteniente del Cuerpo de Policía, en reemplazo del señor José Antonio Ramirez, cuyo nombramiento se declara inasubstantado.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Panamá, a los diez y ocho días del mes de Diciembre de mil novecientos treinta.

F. H. AROSEMENA.

El Subsecretario de Gobierno y Justicia, encargado del Despacho,

RAMON MORALEZ.

DECRETO NUMERO 171 DE 1930

(DE 18 DE DICIEMBRE)

por el cual se nombra suplente del Fiscal del Circuito de Colón.

El Presidente de la República,

EDICTOS

EDICTO

El suscrito, Gobernador de la Provincia y Administrador de Tierras Baldías e Insultadas,

HACE SABER:

Que el señor Harold Abijo Shofor, ha solicitado de este Despacho que se le adjudique en plena propiedad y a título gratuito, un globo de terreno baldío nacional, de diez hectáreas de extensión, ubicado en jurisdicción del Distrito de Capira, conocido con el nombre de "Buenos Aires de Periquete", por medio del siguiente escrito:

"Señor Gobernador de la Provincia, encargado de la Administración de Tierras Baldías e Insultadas,

E. S. D.

El que suscribe, Harold Abijo Shofor, natural de Texas, Estados Unidos de América, domiciliado en la ciudad de Panamá, Zona del Canal, en mi propio nombre y con el debido respeto pido a Ud. se sirva adjudicarme en plena propiedad a título gratuito, previo los trámites de ley un globo de terreno baldío nacional de diez hectáreas, situado en jurisdicción del Distrito de Capira de esta Provincia, conocido con el nombre de "Buenos Aires de Periquete", situado dentro de los siguientes linderos: Norte, tierras baldías y predio de Don Alvarado Sur, el antiguo camino de Las Morlas que lo separa de terrenos de Don Alvarado y tierras baldías; al Este, tierras baldías y al Oeste, la carretera nacional y el río "Periquete".

Este terreno tiene una extensión como de cuatro hectáreas situadas por el señor Leonardo Rivera, quien se encuentra en posesión de ellas en virtud de licencia transitoria, y a quien he comprado las plantaciones dichas, así como también los planos respectivos que él había hecho levantar.

Acompaño a esta solicitud los siguientes documentos:

1.º Dos declaraciones rendidas ante el Jefe Municipal de Capira por los señores Fermín Molina y Pío Alvarado, por las cuales consta entre otras cosas, el que el terreno es adjudicable y que con su adjudicación no se perjudica derechos de terceros.

2.º Dos declaraciones rendidas ante el Despacho de Ud. por los señores Joaquín Amaya y José N. Márquez, por las cuales consta que soy jefe de familia, que yo ni ninguno de los que de mí dependen poseemos terrenos a ningún título en el territorio de la República; y

3.º Tres ejemplares del plano número 1200, levantado por el Agrimensor autorizado señor Manuel A. Alguero, debidamente aprobado por el Agrimensor General.

Fundo esta solicitud en el artículo 151 del Código Fiscal, y me someto a todas las disposiciones de la legislación panameña sobre la materia.

Panamá, Noviembre 13 de 1930.

Harold A. Shofor.

Y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de 1925, se fija el presente edicto en lugar visible de la Secretaría de este Despacho y en la del Ayudante del Intendente de Capira, se envía copia para su publicación en la Gaceta Oficial conforme a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de 1925, para que el que correspondiere, haga valer la anterior solicitud, bajo pena de perderla sin lugar a devolución.

de la mañana de hoy veintuno de Noviembre de mil novecientos treinta.

El Gobernador,

ARCH. E. ROYD.

El Secretario,

Dimita S. Rostrup D.

EDICTO NUMERO 54

El suscrito Juez Quinto del Circuito de Panamá, por el presente cita y emplaza a Carlos Gutiérrez (a) "Gato", de generales y paradero desconocido, para que de acuerdo con lo ordenado por este Tribunal en proceso, se presente dentro del término de doce (12) días, contados desde la última publicación de este edicto, más el de la distancia, a estar en derecho por sí, o por medio de apoderado, en el juicio criminal que se le ha abierto, por los delitos de hurto y falsificación de firma, según auto de proferencia de fecha ocho de Agosto último, que en su parte resolutoria dice así:

"Juzgado Quinto del Circuito.—Panamá, Agosto ocho de mil novecientos treinta.

Vistos: ...

Por las consideraciones que se dejan expuestas, el suscrito Juez Quinto del Circuito de Panamá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara con lugar a proceder, por los trámites ordinarios, por los delitos de hurto y falsificación de firma, que definen y castigan disposiciones contenidas en el Título XIII, Capítulo I, y Capítulo III, Título IX, del Libro II del Código Penal, contra Roberto Tascón Gutiérrez, varón, mayor de edad, natural y vecino de Panamá, casado y civilista, y Carlos Gutiérrez (a) "Gato" de generales desconocidos y los decretos formales. Proven los enjuiciados los medios de su defensa.

Dispone las partes del término de cinco días para aducir las pruebas que intenten hacer valer en la vista oral de la causa, que tendrá lugar el día ocho (8) del entrante mes de Septiembre, debiendo comparecer el actor a las nueve de la mañana.

Como se observa que el enjuiciado Carlos Gutiérrez no ha sido indagado por no haberse podido localizar, se ordena su emplazamiento por treinta días, de conformidad con el artículo 234 del Código de Procedimiento. En el mismo edicto, que se publicará por cinco veces consecutivas en la GACETA OFICIAL, se notificará al enjuiciado de que se trate, este auto de proceder.

Como consta de la información Secretarial de fecha 20 de Julio próximo pasado, que en el Juzgado Cuarto del Circuito han sido llamados a responder en juicio a varios los mismos procesados por delitos similares a los que ahora se les imputan, negocio aquel que fue iniciado con anterioridad al presente, una vez que se han llenado las formalidades del emplazamiento y notificación, y que queda debidamente ejecutoriada este auto, remítase el presente negocio al Juzgado Cuarto del Circuito, para su acumulación con el juicio iniciado en dicho Tribunal, de conformidad con el artículo 234 y siguientes del Código de Procedimiento.

Notifíquese y publíquese.

Carlos Gutiérrez (a) "Gato".

comunes a las que se causen por su rebeldía.

Se cita a las autoridades políticas y judiciales para que procedan a la aprehensión del emplazado o la ordenen, y a todos los habitantes de la República, excepto los favorecidos por el artículo 2008 del Código de Procedimiento, para que manifiesten el paradero del expresado Quiñóres (a) "Gato", bajo pena de ser juzgado como encubridores de los delitos porque se lo persigue, si sabiendo, no lo denunciaron oportunamente.

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 2145 del Código Judicial, se fija el presente edicto en lugar visible de este Tribunal y copia del mismo se remite a la Secretaría de Gobierno y Justicia, para su publicación por cinco veces consecutivas en la GACETA OFICIAL.

Dado en Panamá, en el salón de audiencia del Juzgado Quinto del Circuito, a los diez y siete días del mes de Noviembre de mil novecientos treinta.

El Juez,

AQUILINO TEJERA F.

Amado Argote A.

Secretario.

3 va.—3

EDICTO NUMERO 37

El suscrito Gobernador de la Provincia de Coclé, encargado de la Administración de Tierras Baldías e Indultadas,

HACE SABER:

Que el señor Eustacio García de Paredes, en representación del señor Casimiro Ahíno, ha ocurrido a este Despacho en solicitud de que se le adjudique en plena propiedad, y a título gratuito, un globo de terreno denominado "Quebrada de la Iguala" de nueve hectáreas nueve mil ochocientos metros cuadrados (9 Hta. 9.800 m. c.), situado en el Distrito de Natá, por medio del siguiente memorial:

"Señor Gobernador de la Provincia de Coclé, encargado de la Administración de Tierras,

E. S. D.

Yo, Eustacio García de Paredes, panameño, mayor de edad, soltero, por poder conferido por el señor Casimiro Ahíno, panameño, agricultor, mayor de edad, y jefe de familia, solicito a nombre y en representación del señor Ahíno se le adjudique en plena propiedad y a título gratuito un globo de terreno ubicado en el Distrito de Natá, que mide nueve hectáreas nueve mil ochocientos metros cuadrados (9 Hta. 9.800 m. c.), dentro de los siguientes linderos: Norte, Cultivos transitorios del señor Casimiro Ahíno; Sur, Terrenos baldíos; Este, Terrenos baldíos y Casimiro Ahíno y Oeste, Casimiro Ahíno.

Base esta solicitud en el Artículo 163 del Código Fiscal. Presento a usted con este escrito el plano de dicho terreno con el correspondiente informe; las declaraciones de los señores Agustín Ariza, Presentación Ramos y Tomás Finaño, que comprueban que tiene derecho a que se le adjudique este terreno de acuerdo con la ley.

Penonomé, 5 de Noviembre de 1932.

E. G. de Paredes.

Por tanto, conforme lo ordena el artículo 61 de la Ley 29 de 1925, se fija el presente edicto en lugar visible de este Despacho, y en el de la Alcaldía Municipal del Distrito de Natá, por el término de treinta días hábiles, y se envía copia al señor Secretario de Hacienda y Tesoro pa-

ra su inserción en la GACETA OFICIAL, por tres días consecutivos; haciendo conocer del público, para que el que se crea lesionado en sus derechos se presente a hacerlos valer dentro del término legal.

Filado hoy tres de Noviembre de mil novecientos treinta, a las once de la mañana.

El Gobernador, Administrador de Tierras,

JOSE M. GRIMALDO F.

El Secretario de Tierras,

Federico Zúñiga F.

3 va.—3

EDICTO

Juzgado Sexto del Circuito—Panamá, diecinueve de Noviembre de mil novecientos treinta.

Vistos: Largo tiempo tiene este juicio que se ha ventilado con recio ausente, de hallarse pendiente solo la sentencia definitiva. Varias causas han concurrido a demorar la decisión del proceso que se tiene a la vista. Entre ellas no es la de menor entidad la que hace del recado siempre creciente de trabajo. En un hecho notorio el aumento demográfico que en estos últimos años ha tomado la criminalidad en la República, sobre todo en la ciudad capital.

Las estadísticas señalan regiones muy nutridas en los delitos contra la propiedad y en aquellas que se roban con el honor y el pudor de las personas. No hubo mes, en los años precedentes anteriores, en que este Juzgado no se viera en sus libros de día a día tres o cuatro causas para hacer sentencia. La situación difícil de las cárceles judiciales, su seriedad siempre obstar a la aplicación de la pena a los ciudadanos que rehuyen rendir testimonio, nuestra misma legislación judicial que para coacción pone en manos de los jueces para hacer comparecer a sindicados, testigos, defensores y peritos, han sido también partes muy poderosas a retrasar de momento, muchos de ellos de aludido, poca menos que imposible, los tribunales del crimen.

Con lo dicho queda explicada, que no justificada, la demora de un juicio como el que ahora se decide en el cual la parte interesada ha demostrado muy poco interés en su asunto y en el que ni siquiera fue posible indagar al proceso y cuya responsabilidad, declarada o no por las autoridades judiciales, apenas habría cambiado su situación desde luego que, como consta en los autos, se concentra prófugo.

La historia condenada de este juicio ya la hizo el tribunal al indicarlo con auto de proceder, del cual se ve en los párrafos pertinentes. Dicen así:

"Se ha establecido en los autos con los testimonios de los señores Ealey Reed y Clifford Bolt la propiedad y preexistencia de la parcela de la cual dispuso Turpin sin la asistencia de Fyfe. Además dicha parcela fué debidamente avaluada por los señores Samuel Quiñóres Jr. y Julio Arjona Q. y, por último, los señores Juan B. Sandoval y Gerardo Guardia, reconocidos pedelistas de esta ciudad, nombrados peritos para verificar el cotejo de las firmas que dicen "V. W. Turpin" y a las cuales se ha hecho referencia, dictaminaron lo siguiente:

"De acuerdo con nuestro leal saber y entender, estamos contrarios en afirmar que es tal la semejanza que tienen las dos firmas escritas entre sí que no hay lugar a dudas de que han sido estampadas por una misma persona ya que los rasgos de-

finitivos de las mismas que dicen "V. W. Turpin" son idénticos".

...Estos elementos de prueba son suficientes, en concepto del Juez que suscribe, para justificar el enjuiciamiento de "V. W. Turpin" el cual, dicho sea de paso, no ha podido rendir declaración indagatoria por encontrarse ausente del país, por lo cual se le emplazó por edicto, de fecha dieciséis de Diciembre de 1928, debidamente publicado en el Registro Judicial".

Las sumarias dejaron tan claramente demostrada la responsabilidad criminal de Víctor Turpin, que su defensor, el Dr. Dr. Julio Arjona Q., al hacer uso del derecho que le concede la ley, se expresó en la audiencia oral de la causa de la siguiente manera:

"Apenas quiero decir unas cuantas palabras en relación con este asunto. Indudablemente, como lo dijo el señor Representante del Ministerio Público, en los autos existe la plena prueba de que mi representado al señor Turpin cometió el delito que se le imputa en este juicio, y por el cual actualmente se lo juzga, y en esta situación solo me resta solicitar de la manera más respetuosa al señor Juez que sea lo más acérrimo en lo que se relaciona con la aplicación de la pena a mi representado ya que este confesó inequívocamente su delito en la carta dirigida al Dr. Fyfe que figura en los autos. Por otra parte, la tramitación de este Juzgado se reduce a archivar en forma legal el expediente a la vista ya que mi defendido no se encuentra en esta ciudad ni en la República de Panamá, y por lo mismo, en caso de dictarse una sentencia condenatoria, la sanción penal aparejada a mi representado, por el hecho cometido, no podría ponerse en vigor. Sin tener nada que agregar, debo pues, la resolución de este juicio al claro y justiciero criterio del Juezador".

Razonar sobre la culpabilidad de Turpin hiciera. Por ello el suscrito ha de limitarse en este fallo a aplicar la pena a que se ha hecho arrender. El artículo 367 del Código Penal —disposición aplicable al caso— señala pena de reclusión que oscila entre quince días y dieciséis meses, y multa de diez a cien balboas. Téngase en cuenta, al graduar esa pena, que Turpin —temeroso de la sanción que su delito inequívocamente le aparejaría— abandonó el país; que las relaciones entre él y el doctor Fyfe hacen presumir en éste muchísima confianza en una persona a quien entregó una sencilla cosa valor estimada en dos mil balboas (B. 2.000.00) y, por último, que la prenda mencionada ha sido tasada por peritos en la suma de cuatrocientos balboas (B. 400.00). En esta situación estima el tribunal que la pena aplicable a Turpin en la de un año de reclusión y setenta y cinco balboas (B. 75.00) de multa.

Por lo expuesto, el suscrito Juez Sexto del Circuito, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el concepto del Fiscal 3º del Circuito, CONDENA a VÍCTOR TURPIN, mayor de edad, casado, natural de Jamaica a sufrir la pena de un año de reclusión que debe cumplir en la Cárcel Modelo y a pagar a favor del Tesoro Público una multa de setenta y cinco balboas (B. 75.00).

Para darle cumplimiento a lo que dispone el artículo 2147 del Código Judicial, publíquese por cinco veces este fallo en la GACETA OFICIAL. Léase remítase los autos al superior en grado de consulta.

Cópiese y notifíquese

El Juez,

IGNACIO NOLA.

El Secretario,

Luis A. Carroasco M.

5 va.—5

EDICTO

El suscrito Alcalde Municipal del Distrito de David,

HACE SABER:

Que en poder del señor Felipe González, de setenta años, casado, agricultor y con residencia en esta ciudad, se encuentra depositado un toro como de dos años de edad, color canelo y sin ninguna marca, el que se encontraba vagando en jurisdicción de este Distrito, en el Cuartel de Chiriquí, desde hace más de cinco meses sin que se lo haya conocido dueño.

De conformidad con los artículos 1600 y 1601 del Código Administrativo se fija al presente edicto en el lugar acostumbrado de este Despacho y copia de él se envía al señor Secretario de Gobierno y Justicia para su publicación en la GACETA OFICIAL por el término de treinta (30) días para que todo aquel que se crea con derecho al referido animal lo haga valer en tiempo oportuno. Si en el término fijado no se presenta nadie a reclamarlo no se dará a la venta en almoneda pública por el Tesoro Municipal.

David, 7 de Julio de 1930.

El Alcalde,

P. ARANDA A.

El Secretario,

M. de J. Jón Jr.

30 va.—3

AVISO

En poder del señor Basilio Sánchez, vecino de este Municipio, a quien este Despacho ha nombrado su depositario, se encuentra un caballo moro, de mediana estatura y herrado en la pata y palpa derecha así: (EA).

Este bien fue traído al corral municipal por encontrarse vagando dentro del perímetro de la población, cuyo hecho está en pugna con lo que establece el Decreto dictado por esta Alcaldía, N.º 15 de fecha (20) de Julio de 1929, que prohíbe el mantenimiento en soltura de ganado vacuno y caballar dentro del poblado y sus arrabales.

Dicho animal, de conformidad con el mencionado Decreto, ha sido declarado como bien vacante.

Para dar cumplimiento a lo que ordena el artículo 1601 del Código Administrativo, se fija este aviso en lugar público de esta población, y otro del mismo tenor, se envía al señor Secretario de Gobierno y Justicia, para su publicación en la GACETA OFICIAL por el término de (30) días, para que el que se crea con derecho, lo haga valer en tiempo oportuno.

Llenada esta formalidad de la ley, se llevará a remate público, por el señor Tesorero Municipal, el semoviente en referencia.

El Alcalde,

JOSE L. PACHECO.

El Secretario,

JOSE A. CUELLA N.

30 va.—3

Publicado en Gaceta Oficial N.º 4754-11